

La coordinadora de la campaña de tóxicos de la organización, Sinai Guevara —quien participó en una campaña de inspección por la zona—, indicó que el problema generado por los 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre ácido vertido por parte de una minera de la empresa Grupo México ya es "demasiado grave" y "no habría posibles soluciones que realmente impidan que se altere el ecosistema".

"El daño que hicieron (...) esta filtración de metales va a ser algo imposible de detener. Lo que deberían estar haciendo es informar a las personas sobre los riesgos reales, porque están entrando en un pánico total de no saber si sus pozos están contaminados", dijo en entrevista con CNNMéxico.

Los metales derramados son persistentes a la naturaleza y llegaron a 200 kilómetros de distancia.

La activista urgió a las autoridades a transparentar los estudios realizados en la zona, al enfatizar que, a más de un mes del derrame, los habitantes de la zona viven sin agua corriente y en "total incertidumbre" sobre si sus productos están contaminados.

Greenpeace realizó un recorrido por la zona del derrame — integrada por siete municipios, en los cuales viven más de 24,000 personas—, donde observó que únicamente se está realizando una limpieza superficial para retirar los lodos.

Los ambientalistas revisaron documentación de la zona afectada y recolectaron testimonios, así como un muestreo del cual aún no se cuenta con los resultados.

Aunque la minera afirmó que los ácidos vertidos no son tóxico "en sí mismo" ni hay riesgo de grave afectación a las comunidades, *Greenpeace* aseveró que la sustancia puede provocar a la población daños al sistema nervioso, hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos, que pueden propiciar enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson, saturnismo, hepatitis, cáncer, hemocromatosis, osteoporosis o hasta la muerte, en el caso del arsénico.

"Tienen que impedir que (la contaminación) llegue a los mantos freáticos y, dada la cantidad de litros que se derramaron y la concentración de metales, es algo realmente difícil de conseguir", agregó la activista.

Guevara comentó que, el día del incidente, pobladores de la zona levantaron una muestra de agua, en la cual detectaron un nivel de 5,000 miligramos por litro de arsénico, concentración —explicó— "muy alta" como para pretender remediar sólo con retirar los lodos.

La activista insistió en la importancia de impedir la filtración al subsuelo, al destacar que se trata de una región que enfrenta problemas de acceso a agua.

"Es una zona de muy baja disponibilidad de agua, la mayor parte de los ríos son subterráneos, y es muy poca la cantidad (de agua) que corre por ellos. Es una zona en la que debe cuidarse mucho el agua y con la contaminación, están condenando a la sed a estos siete municipios", afirmó Guevara.

El pasado 6 de agosto se registró el derrame en el municipio de Cananea, incidente que fue calificado por el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, como el "peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos".

El gobierno federal aseveró que la empresa —una de las más

El gobierno federal asevero que la empresa —una de las más grandes del sector a nivel internacional— deberá pagar hasta "cientos o miles de millones de pesos" para reparar los daños, y presentó una demanda penal.

Pobladores damnificados han presentado denuncias colectivas por el caso, en tanto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora interpuso otra demanda penal.

08 de septiembre de 2014
Fuente: [CNN](#)